

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA

Auto Nro.

RADICADO: 76001-23-33-006-2018-00367-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
(LABORAL)
DEMANDANTE: COLPENSIONES
DEMANDADO: CARLOS EVELIO BALANTA TRIVIÑO
ASUNTO: AUTO RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

Santiago de Cali, tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020)

ANTECEDENTES

1. El Despacho, encontrándose el proceso para fijar fecha para audiencia inicial, observa que se expidió el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 —que tiene como objeto la implementación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entre otros¹—.
2. Dicho Decreto, en el artículo 12, establece que las excepciones previas se formularán y decidirán de conformidad con lo prescrito por los artículos 100, 101 y 102 del CGP. Por lo tanto, como en este caso ya venció el término del traslado de las excepciones propuestas por la parte demandada, se procederá a su decisión.
3. La apoderada judicial del señor Carlos Evelio Balanta Triviño formuló las excepciones previas de: i) falta de jurisdicción y competencia e ii) inepta demanda.
4. Frente a la primera excepción, dijo que la jurisdicción que debe asumir el conocimiento de las pretensiones de la demanda, por la calidad de trabajador oficial que ostentó el demandado en actividad y por derivar la pensión de jubilación de una Convención Colectiva de Trabajo, es la laboral.
5. Respecto de la excepción de inepta demanda, planteó que la parte actora no podía demandar los actos administrativos que reconocieron la pensión de vejez a favor del señor Carlos Evelio Balanta Triviño, pues el jefe de la oficina asesora de asuntos legales de Colpensiones, en concepto BZ-2018-58147 del 3 de enero de 2018, adoptó la tesis de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, y de la Corte Constitucional sobre la compatibilidad de las pensiones cuando las convenciones colectivas de trabajo así lo dispongan.
6. Indicó que Colpensiones, en el concepto BZ-2018-58147 del 3 de enero de 2018, planteó que las acciones de cobro y las solicitudes de revocatoria directa cesarían

¹ Artículo 1.

contra los jubilados del municipio de Palmira que hayan tenido derecho a una pensión de naturaleza compatible y que, de igual manera, se debería retirar o presentar desistimiento de las demandas con pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y tesis

7. La Sala debe determinar si hay lugar a declarar probadas las excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia e ineptitud de la demanda.

8. La tesis de la Sala es que debe declararse no probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia, pues si la autoridad administrativa considera que el acto es contrario a la CP o a la Ley, en los términos del artículo 97 del CPACA, debe demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De otra parte, no se tomará como previa la excepción de inepta demanda, pues, además de que no se presentan ninguno de los presupuestos que configuran esa excepción, sus argumentos atacan la pretensión y no buscan sanear aspectos procesales, propios de las excepciones previas.

9. Para resolver el problema jurídico se analizará: i) la acción de lesividad, (ii) las excepciones en el CPACA y (iii) el caso concreto.

2. Solución del caso

2.1. La acción de lesividad

10. El artículo 97 del CPACA establece lo siguiente:

ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.

PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa. (Subraya fuera del texto original).

11. Entonces, el legislador facultó a la administración para demandar su propio acto —si consideraba que fue contrario a la CP, a la ley u ocurrió por medios ilegales o fraudulentos— ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior, si el particular, que es titular del derecho reconocido por el acto administrativo demandado, no dio el consentimiento expreso para revocar directamente.

12. Al respecto, el Consejo de Estado (2014)² explicó que la posibilidad legal del Estado y de las demás entidades públicas, para impugnar sus propias decisiones, se identifica, a nivel doctrinal, con el nombre de acción de lesividad.

13. Manifestó que dicho instrumento impugnatorio tiene fundamento en: i) la CP (artículos 2º, 4º, 6º, 121, 122, 123 inc. 2.º y 209, entre otros), para procurar la prevalencia del ordenamiento convencional, constitucional y la sujeción al principio de legalidad de las actuaciones y decisiones de los servidores públicos, y ii) en las normas adjetivas del CPACA (artículos 149, 151, 152, 154 y 155) que habilitan a la Nación y a las demás entidades públicas para que comparezcan a los procesos contencioso administrativos como demandantes.

2.2. Excepciones en el CPACA

14. El Consejo de Estado (2020)³ planteó que las excepciones son medios de defensa que el ordenamiento jurídico dispone a favor de los demandados, con el objeto de: i) enderezar el procedimiento para evitar nulidades procesales (previas), o ii) desvirtuar las pretensiones elevadas por la parte demandante (de fondo o perentorias).

15. Dijo que las excepciones previas son las que buscan el saneamiento del trámite procesal, mientras que las perentorias se dirigen a desconocer o atacar la existencia del derecho reclamado y, por último, las denominadas excepciones mixtas son las que buscan desvirtuar las pretensiones, pero pueden ser decididas de forma previa.

16. Especificó que la resolución de las excepciones, en el actual procedimiento contencioso administrativo, se realiza en dos etapas distintas, pues las de carácter previo y mixto deben ser resueltas en el trámite de la audiencia inicial y las perentorias al momento de decidir de fondo el litigio.

17. Sin embargo, el momento procesal para decidir las excepciones previas fue objeto de modificación extraordinaria y temporal, a través del Decreto 806 de 2020, para dotar de celeridad el trámite y la decisión de las diferentes causas judiciales, pues contempló que: i) el juez, antes de la audiencia inicial, debe decidir las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas; (ii) en caso de prosperar alguna excepción, que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, se proceda a declarar terminada la actuación; (iii) si se requiere la práctica de pruebas, para determinar la configuración de una excepción previa, en el mismo auto que se cite a audiencia inicial se dispondrá su decreto y se practicarán y resolverán en la referida diligencia; y (iv) sólo se tramitarán las excepciones previas, una vez haya finalizado el traslado de la reforma de la demanda.

18. Por último, el Consejo de Estado (2020)⁴ planteó que la excepción de inepta demanda, contenida en el numeral 5 del artículo 100 del CGP, procede, únicamente:

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2014, radicación número 66001-23-31-000-2009-00087-02(47830).

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2020, radicación número 25000-23-36-000-2019-00236-01(65583)B.

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2020, radicación número 25000-23-36-000-2019-00236-01(65583)B.

i) por falta de los requisitos formales dispuestos en el estatuto procesal, o ii) por indebida acumulación de pretensiones.

2.3. Caso concreto

19. La demanda pretende la nulidad de las resoluciones 21612 de 2009 y 165892 de 2013, que reconocieron y reliquidaron una pensión de vejez a favor del demandado, pues al señor Carlos Evelio Balanta Triviño ya se le había reconocido, por el municipio de Palmira, una pensión de jubilación, lo que en concepto de la demandante imposibilitaba que, en el reconocimiento de la pensión de vejez por Colpensiones, se tuvieran en cuenta los tiempos de carácter público, ya que lo correcto era contabilizar los tiempos cotizados únicamente al sector privado.

20. Sobre la excepción de inepta demanda, la parte demandada dijo que Colpensiones no puede solicitar judicialmente la nulidad de las resoluciones 21612 de 2009 y 165892 de 2013, porque el jefe de la oficina asesora de asuntos legales de Colpensiones varió la postura y adoptó la tesis de la compatibilidad pensional.

21. La Sala observa, en primer orden, que la excepción de inepta demanda no ataca la falta de cumplimiento de los requisitos formales dispuestos en el estatuto procesal ni la presencia de una indebida acumulación de pretensiones y, por ende, no se subsume en ninguno de los eventos que, en virtud del numeral 5 del artículo 100 del CGP, torna procedente ese medio exceptivo en particular.

22. Antes bien, la excepción, tal como fue formulada, ataca directamente la pretensión de la demanda, pues busca desvirtuar que el señor Carlos Evelio Balanta Triviño perciba una doble asignación del Estado, al contrastarlo con la compatibilidad pensional reconocida por la Convención Colectiva de Trabajo y, en ese orden de ideas, es un asunto que debe ser resuelto de fondo con la sentencia.

23. Por último, la Sala considera que, acorde con el artículo 97 del CPACA e independientemente del vínculo laboral que el demandado tuvo en actividad, se le permite a la administración demandar su propio acto administrativo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo —a pesar de que el titular del derecho reconocido en ese acto niegue su consentimiento para revocar directamente— por resultar lesivo a la CP y a la ley. Además, el Consejo de Estado (2014)⁵ planteó que la acción de lesividad se convierte en una verdadera acción de nulidad y restablecimiento del derecho —que no es propia de la jurisdicción ordinaria laboral— pues se pretende con la nulidad de su propio acto administrativo el restablecimiento de un derecho que consiste, en el caso bajo estudio, en la devolución de lo pagado por concepto de pensión de vejez, desde la inclusión del demandado en nómina de pensionados.

24. En ese orden de ideas, el Tribunal, en virtud del CPACA, está facultado para conocer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, cuando se pretenda declarar la nulidad de los actos propios que reconocieron una pensión de vejez a favor del señor Carlos Evelio Balanta

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2014, radicación número 66001-23-31-000-2009-00087-02(47830).

Triviño y, en consecuencia, se declarará no probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

DISPONE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia, formulada por el apoderado judicial del demandado, acorde con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

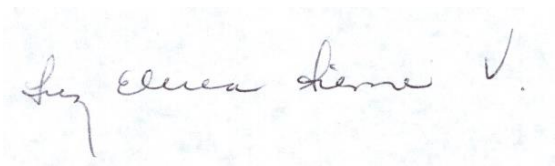
SEGUNDO: Ejecutoriada la presente decisión, vuelva el proceso al despacho para fijar fecha de audiencia inicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

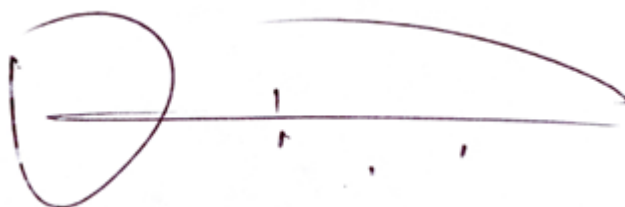
Los magistrados,



PATRICIA FEUILLET PALOMARES



LUZ ELENA SIERRA VALENCIA



OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT